

054/2024

La propuesta normativa de Real Decreto Ley no lleva título, pero su objeto, conforme al art. 1 de la misma, es *el establecimiento del marco regulador general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia por los distintos Departamentos ministeriales, ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.*

Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos cabe destacar en primer lugar que por el Capítulo II de la propuesta normativa se crea un denominado *Registro de personas afectadas por la DANA*, y el artículo 5 establece como objeto de este tramitar las ayudas reguladas en el artículo 2.1 con mayor eficacia, eficiencia y celeridad, siendo dicho Registro “de carácter voluntario, gratuito y de naturaleza administrativa”.

Lo primero que esta AEPD pone de manifiesto es la **necesidad**, en sí misma, de creación de este Registro específico, que es de carácter voluntario. Dicha *voluntariedad* significa, por tanto, que la constancia de las personas físicas afectadas por la DANA en ese registro no es imprescindible (“necesaria”) para la concesión de las ayudas. Todo tratamiento de datos personales supone una injerencia y un riesgo en el derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados. Más aún en este caso, en que en dicho Registro, con carácter *voluntario*, podrán inscribirse las personas físicas y respecto de ellas constarían, entre otros datos personales, “*Identificación de los daños personales producidos distinguiendo los fallecimientos de las lesiones incapacitantes*”. Esto es, dicho Registro procederá al tratamiento de datos personales especialmente protegidos (datos relativos a la salud), tratamiento que está específicamente prohibido conforme al art. 9.1 RGPD, salvo que concurra una causa de levantamiento de la prohibición de las enumeradas en el art. 9.2 RGPD, causa esta que en la propuesta normativa presentada para criterio urgente no se especifica. En opinión de esta AEPD, y de conformidad con el RGPD, la causa del art. 9.2.a) RGPD no sería suficiente para levantar la prohibición, ya que ese consentimiento previsto en el mencionado apartado no sería verdaderamente “libre”, tal y como resulta del Considerando 42 RGPD. Sería necesario buscar una causa de levantamiento de la prohibición de entre ellas. Esta AEPD considera que la causa que podría servir para levantar dicha prohibición será la contenida en la letra g) del art. 9.2 RGPD.: cuando el tratamiento es necesario **por razones de un interés público esencial**, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados

miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado. Ello hace necesario que por el redactor del proyecto se explicita ese interés público “esencial”, que con tal adjetivo sugiere un interés más allá del ordinario interés público derivado del ejercicio de competencias administrativas. En definitiva, corresponde a la norma establecer las razones por las que existe la necesidad de crear un registro específico que procederá a la recopilación de datos personales, y por qué dicho registro ha de comprender datos personales especialmente protegidos, cuál es el interés público *esencial* que justificaría el levantamiento de la prohibición de tratamiento de dichos datos (arts. 9.1 y 9.2 RGPD), así como, conforme a dicho apartado 9.2, cuáles serían las medidas adecuadas y específicas establecidas en el Real Decreto Ley para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.

Esta AEPD, en cualquier caso, considera que también podría basarse dicho tratamiento en la causa del art. 9.2.b) RGPD, pues este tratamiento podría ser “necesario” (lo que requeriría la consiguiente explicación, ya mencionada anteriormente en este informe) para el cumplimiento de obligaciones del responsable del tratamiento en el ámbito de la **protección social**, habida cuenta del objetivo previsto en el real decreto ley. Del mismo modo, esa norma debería de establecer *garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los intereses del interesado*. El art. 5.3 del proyecto señala que dicho Registro estará adscrito a la Secretaría de Estado de Política Territorial, por lo que esta debería de aparecer específicamente como *responsable del tratamiento*, (de acuerdo con tal concepto en el RGPD), en la redacción de la norma.

El art. 7.5 del proyecto establece que *la inscripción en este Registro permite acreditar la condición de personas afectadas por la DANA y poder ser considerado solicitante de las ayudas previstas en el artículo 2.1*. Sin embargo, y como ya se ha mencionado, dicha inscripción es meramente voluntaria, por lo que no se establece ninguna prevención para aquellas personas que no deseen inscribirse en dicho registro (ya que aparece como meramente voluntario, ex art. 5.1 de la propuesta normativa) y que igualmente tienen derecho tanto a solicitar las ayudas como a ser considerados personas afectadas por la DANA.

Este carácter “voluntario” del Registro nos lleva de nuevo a insistir sobre la “necesidad” del propio Registro. El art. 9.2. RGPD establece la “necesidad” (no la “conveniencia”), en sus distintos apartados que serían aplicables, como causa habilitante para el levantamiento de la prohibición de datos personales especialmente protegidos. Si es “voluntario”, ese tratamiento no es “necesario” (porque ciertamente habrá otra forma de comprobar las circunstancias que ameritan la concesión de las ayudas a los afectados que “voluntariamente” decidan no inscribirse en el Registro). Lo mismo cabe señalar respecto del art.

8.5 de la propuesta; la pérdida de la vigencia de la inscripción y la cancelación de esta será la pérdida de la condición de solicitante y en su caso, la de beneficiario de las ayudas. Todo parece pensado para que este Registro sea el vehículo o medio único para la concesión de las subvenciones, cuando no es esto lo que se desprende de la “voluntariedad” de la solicitud en el Registro. Idéntica precisión cabe realizar respecto del art. 10.4 de la propuesta, que dice que *La cancelación de la inscripción supondrá la pérdida de la condición de persona o entidad beneficiaria de las ayudas previstas en el artículo 2.1.*

El art. 15.1 refiere a las entidades colaboradoras. Desde el momento en estas tratan datos personales por cuenta de un responsable del tratamiento, son “encargados del tratamiento”, y deberá acordarse un contrato de encargo con ellas conforme al art. 28 RGPD.

Una vez expuestos los comentarios relativos a la creación del Registro, pasamos al art. 4 de la propuesta, que regula el “Tratamiento y transmisión de datos de carácter personal para la gestión del Registro de personas afectadas por la causados por la DANA”.

En primer lugar, esta AEPD se muestra conforme con el rango de la disposición presentada (rango de ley), conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 292/2000 o 76/2019) y la propia Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), art. 8.1.

El art. 6.1 RGPD establece que para que un tratamiento sea lícito deberá basarse en alguna de las bases jurídicas establecidas en dicho precepto. Entre ellas, los apartados c) y e) dicen que serán lícitos los tratamientos cuando sean c) “necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;”, o e) necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”. Estas son las bases jurídicas elegidas por la propuesta en su art. 4.6, lo que nos lleva, una vez más, a plantearnos, lo que deberá de responderse en la norma, acerca de si dichos tratamientos de datos (del Registro) son “necesarios” para las finalidades previstas en la norma.

El art. 6, apartados 2 y 3 del RGPD, establece que.

2. Los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), fijando de manera más precisa requisitos específicos de tratamiento y otras medidas que garanticen un tratamiento lícito y equitativo, con inclusión de otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX.

3. La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por:

a) el Derecho de la Unión, o

b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.

La finalidad del tratamiento deberá quedar determinada en dicha base jurídica o, en lo relativo al tratamiento a que se refiere el apartado 1, letra e), será necesaria para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Dicha base jurídica podrá contener disposiciones específicas para adaptar la aplicación de normas del presente Reglamento, entre otras: las condiciones generales que rigen la licitud del tratamiento por parte del responsable; los tipos de datos objeto de tratamiento; los interesados afectados; las entidades a las que se pueden comunicar datos personales y los fines de tal comunicación; la limitación de la finalidad; los plazos de conservación de los datos, así como las operaciones y los procedimientos del tratamiento, incluidas las medidas para garantizar un tratamiento lícito y equitativo, como las relativas a otras situaciones específicas de tratamiento a tenor del capítulo IX. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros cumplirá un objetivo de interés público y será proporcional al fin legítimo perseguido.

A su vez, el art. 8 LOPDGDD señala que

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

El apartado 1 del art. 4 de la propuesta refiere que los tratamientos de datos personales que se realicen para la gestión del Registro se llevarán a cabo

conforme al RGPD y la LOPDGDD. Esta Agencia considera correcta dicha llamada con carácter general a la normativa aplicable, si bien sería incompleta, por lo que ya se ha expuesto relativo a los tratamientos de datos personales de categorías especiales, en relación con el art. 9.1 y 9.2 RGPD en este informe (datos de salud). El resto de los apartados del art. 4 responden a los apartados previstos en el art. 6.3 RGPD transcrito. Sería conveniente que la relación de entidades y organismos a quienes se pudieran transmitir o se autorizan a ceder (apartados 3 y 4 del precepto en la propuesta) datos personales para el cumplimiento de sus respectivas misiones de interés público para la gestión de los procedimientos de otorgamientos de ayudas etc. estuvieran acotados para garantía de los derechos de los interesados, y no se contuviera una relación abierta, de la que no se sabe específicamente cuáles son esos organismos o entidades a quienes se permite la cesión o transferencia de datos.